

C.A. de Santiago

Santiago, seis de octubre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen Patricio Pietro Renato Lizárraga Nardocci, Sebastián Carmona Silva, y Max Becker Gana, en nombre y representación, de la sociedad LAZCANO, LAMAS Y FRANZANI LTDA, interponiendo acción de protección en contra de doña Evelyn Rose Matthei Fornet, en su calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia y de todos los Concejales del Honorable Concejo Municipal de Providencia, por el acto arbitrario e ilegal consistente en no renovar las patentes de alcoholes, roles N° 4-23824-25, decisión adoptada en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 62, de 20 de diciembre de 2022, a través del Decreto Alcaldicio N° 1960, de 30 de diciembre de 2022, confirmando su postura antijurídica, en el Decreto Alcaldicio N° 165, de 13 de febrero de 2023, afectando las garantías previstas en los N° 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitan se acoja el recurso, dejándose sin efecto los Decretos Alcaldicios, y que el Municipio, dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles, dicte al efecto el correspondiente Decreto Alcaldicio de reemplazo que renueve las mencionadas patentes y que sean, en consecuencia, habilitadas administrativamente por el Departamento de Rentas del Municipio para su uso, goce y disposición, todo con costas.

Explica que el Concejo Municipal y la Alcaldesa, con fecha 20 de diciembre de 2022, en Sesión Ordinaria N° 62, al momento de tomar Acuerdo sobre la materia – en este caso – la decisión de no renovar las patentes de alcoholes (Rol N° 4-23824-25) de su representada, señaló que: *“La señora Tania Fernández (Jefa de Atención al Contribuyente: informa que la última patente su ubica en calle Constitución N°8, Lazcano Lamas y Franzani Ltda. Es un restaurante diurno y se acordó por unanimidad no renovar las patentes de alcohol de restaurante diurno y nocturno debido a tres infracciones a la Ley Sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas sin ingerir*



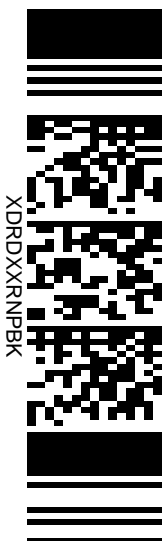
alimentos y el otro por mantener espectáculo en vivo sin la patente respectiva y está con condena. No posee infracciones a la Ley sobre Rentas Municipales, no tiene reclamos y la junta de vecinos se pronunció señalando que es un local problemático, especialmente por daños al espacio público, recién cerró y ellos creen que tienen una venta del derecho de llaves, y esto último no ha sido posible rectificarlo aún. La Dirección de Fiscalización verifica el retiro del nombre de fantasía y de sus redes sociales a contar del 01 de noviembre de 2022, por lo tanto, no está activo y ahí se puede apreciar la evidencia de lo que ocurre en el local”).”.

Lo anterior daría cuenta que previamente a la decisión del Concejo, existía una decisión tomada, no había reclamos ni infracciones a la Ley de Rentas Municipales y que encontrándose el local cerrado, no se renuevan las patentes de alcoholes, con el fin de que su representada, no lucre, es decir, que no pueda venderlas.

Sostienen que la decisión de no renovación de las patentes, contiene argumentos o motivaciones que no corresponden a las que el legislador establece, desde que el hecho de que tenga infracciones a otras normativas, no son razón suficiente para la no renovación ni pueden servir de sustento jurídico para esa finalidad.

Agregan que, tampoco se revisó el contenido de la opinión desfavorable de la Junta de Vecinos, y que, en todo caso, la opinión de ellos no es coherente ni verosímil, desde que no se indican hechos ciertos ni determinados, no existe individualización de vecinos presuntamente afectados por acciones u omisiones de su representada, ni se detallan hechos en concreto que afecten el interés general de la comuna de Providencia, por lo que no se cumple en la especie con el requisito señalado en la Ley de Municipalidad, relativa a la consulta previa de la Junta de Vecinos. Además, controvierte la existencia de dicho informe.

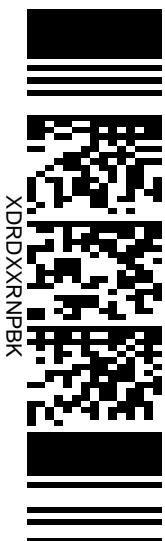
Explican que, la arbitrariedad e ilegalidad se presenta, desde que, del texto expreso de ese acto administrativo terminal (Decreto Alcaldicio N° 1960), no entrega razón o fundamento, ya que éste no se refiere con claridad a los hechos presuntamente comprobados, ni tampoco es preciso en indicar quiénes habrían sido las personas



afectadas de las inconductas que se le imputan a mi representada. Sostienen que, *de acuerdo con* la Ley N°18.695, para resolver sobre el otorgamiento, la renovación, caducidad o el traslado de patentes para expendio de bebidas alcohólicas, el Alcalde requiere de una consulta previa a las Juntas de Vecinos respectivas y el acuerdo del Concejo Municipal y que, en este caso en concreto, la parte resolutive tanto del Decreto Alcaldicio N° 1960, de fecha 30.12.2022 y del Decreto Alcaldicio 165 (que confirma postura de no renovar patentes de alcoholes), de fecha 13.02.2023, esbozan y trazan la idea de que existe una opinión desfavorable de la Junta de Vecinos, sin que se desarrolle en dicho acto administrativo terminal, el contenido que lo otorga en los hechos el carácter de desfavorable a los intereses de su representada. Además, se indica que la no renovación, encontraría sustento que se trata de un sector, con numerosas patentes de alcoholes que provocan externalidades negativas en un barrio residencial, sin especificar, detallar ni mucho menos individualizar, hechos de esta naturaleza en concreto. Sobre este punto, afirma que, resulta grave que el Municipio, le impute externalidades negativas a su representada, sin puntualizar sobre que versarían estos hechos que afectan en teoría en interés general de la comuna.

Señalan que existe una ausencia de precisión en el reproche que se le formula a su representada por parte de la Municipalidad recurrida lo que da cuenta de un obrar arbitrario que queda de manifiesto al examinar los documentos aparejados a su decisión, de los cuales se advierten tres infracciones a la Ley de Alcoholes – que no son tales –, dos de las cuales tienen sentencia condenatoria, un presunto informe desfavorable de la Junta de Vecinos cuya existencia y contenido fáctico se desconoce y no fue materia de conversación al momento de tomar esta decisión entre los Concejales y la Alcaldesa y externalidades negativas que también, hasta la fecha, se desconoce su temporalidad y el perjuicio patrimonial generado a la comuna por parte de su representada.

En síntesis, afirman que la decisión que ha tomado la Municipalidad de Providencia, en orden a no renovar las patentes de alcoholes de la sociedad recurrente, ha sido dictada sin cumplir con lo



establecido en el ordenamiento jurídico vigente, apartándose a lo establecido en el artículo 65 letra o) de la Ley Orgánica de Municipalidades y a la actual jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, por lo que los actos administrativos impugnados devienen en ilegal; y, asimismo, resultan de todo arbitrarios, al constatarse que adolecen de la suficiente motivación para el caso en concreto.

En cuanto a las garantías fundamentales vulneradas, señalan que los hechos descritos importan la afectación de los derechos del N°s 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que, la falta de motivación, transgrede el derecho de igualdad ante la ley y, que su representada, tendría un derecho de propiedad sobre la patente de alcoholes, que ha sido afectado solo por motivo de que actualmente no las está explotando.

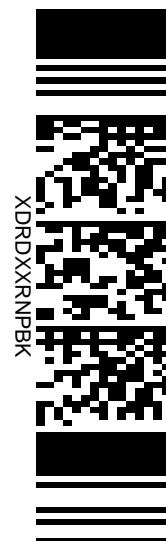
SEGUNDO: Que informa Pablo Duran Urrutia, abogado, en representación de la Municipalidad de Providencia, solicitando el rechazo del recurso de protección.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso de protección, desde que su fundamento dice relación con el Decreto Alcaldicio N° 1960, de fecha 30 de diciembre del año 2022, que no renovó la patente de alcoholes, el que fue notificado el día 16 de enero del año 2023, a un representante de la sociedad recurrente, por lo que, habiéndose interpuesto la presente acción cautelar, el 14 de marzo del presente año, lo ha sido fuera del plazo previsto en el Acordado.

Sobre lo anterior, agrega que, el hecho de que el recurrente haya presentado una solicitud de reconsideración destinada a hacer variar el parecer del Concejo Municipal, no le otorga una suerte de suspensión o interrupción del cómputo del plazo para su interposición.

En subsidio, informa sobre el fondo del recurso de protección.

En primer lugar, indica que la decisión fue adoptada por el órgano facultado por la ley para hacerlo, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.695. En efecto, sostiene que la decisión del Concejo Municipal de Providencia y de su Alcaldesa, fue expresada en el Decreto Alcaldicio N° 1960, de fecha 30 de diciembre



del año 2022, con apego irrestricto al procedimiento indicado en el artículo 65 letra o) de la Ley N° 18.695, pues tal decisión fue precedida por la consulta a la Junta de Vecinos respectiva, haciendo presente que para el cumplimiento de la mencionada obligación, basta con que se verifique únicamente el trámite de haber efectuado la consulta, no siendo dicha respuesta, en caso de recibirla, vinculante para Concejo o para el Alcalde. Sin perjuicio que, sí se recibió respuesta de la Junta de Vecinos, mediante carta-informe N°53, de 25 de noviembre del año 2022, quien se pronunció de manera desfavorable respecto del local de la recurrente.

Afirma que los abogados de la recurrente faltan a la verdad o, al menos, expresan los hechos de manera confusa, puesto que se encuentra acreditado que la recurrente sí incurrió en infracciones a la Ley de Alcoholes, siendo este uno de los motivos que se tuvo en consideración para la decisión que se recurre-es decir, la existencia de dos condenas por infracción a la Ley de Alcoholes, sancionados por el 2° y 3° Juzgado de Policía Local de Providencia, respectivamente, la que se adoptó con estricto apego al ordenamiento jurídico.

Seguidamente, da cuenta de las inconsistencias en las afirmaciones que se contienen en el presente recurso de protección y en la reconsideración que presentó el recurrente en su oportunidad, pues esta última reconoce la existencia de infracciones a la Ley de Alcoholes.

En cuanto a las ilegalidades y arbitrariedades denunciadas, afirma que el Decreto Alcaldicio N° 1960, de 30 de diciembre del año 2022, cumple con el estándar de motivación, dando cuenta de los antecedentes que se tuvieron en consideración para arribar a la mencionada decisión.

Conforme lo anterior, sostiene que en la especie no existe vulneración de los derechos fundamentales alegados por la recurrente en su recurso, por lo que pide el rechazo del mismo.

TERCERO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de



acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar:

- a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;
- b) que, como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria, se prive, perturbe o amenace un derecho; y
- c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

A lo anterior debe agregarse que este debe interponerse dentro del plazo de treinta días según lo contempla el N°1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

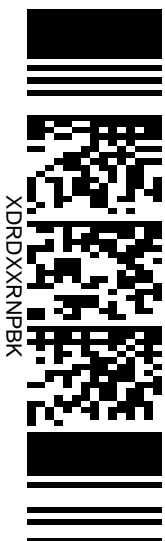
I.- En cuanto a la extemporaneidad del recurso en cuanto al Decreto Alcaldicio N° 1960.

CUARTO: Que consta de los antecedentes que el Decreto Alcaldicio N°1960, como consta de los antecedentes acompañados; y en todo caso, no desconocido por la recurrente, se le notificó el día 16 de enero del año en curso; y que el recurso de protección fue deducido ante esta Corte el día 16 de marzo último; de modo que, en relación a este acto, es, efectivamente, extemporáneo, por lo que, a su respecto, se acogerá la alegación que, en este aspecto, formuló la recurrida; sin que, altere tal conclusión que haya interpuesto reconsideración, pues el arbitrio se funda en dos actos administrativos separados, con argumentos distintos y dictados en fechas separadas.

Sin perjuicio que lo anterior, es suficiente para desestimar el arbitrio en contra de este Decreto, igualmente se emitirá pronunciamiento respecto del fondo.

II. En cuanto al fondo del recurso:

QUINTO: Que los actos que se estiman ilegales y arbitrarios son los Decretos Alcaldicios N°1960, de 30 de diciembre del año 2022 y N°165 de 13 de febrero del año 2023, mediante el cual; el primero, dispuso la no renovación de las patentes de alcoholes roles N°4-23824 y 4-23825 Restaurante Diurno y Restaurante Nocturno; y el segundo; que rechazó la reconsideración deducido en contra del Decreto Alcaldicio anterior, por no haberse presentado nuevos



antecedentes, ambos emanados de la señora Alcaldesa Municipalidad de Providencia; el primero de la señora Matthei; y, el segundo, de su subrogante, señora Vargas.

SEXTO: Que no existe controversia respecto que la recurrente explota un Restaurante Diurno y Nocturno, ubicado en calle Constitución N°8 de la Comuna de Providencia; que contaba con dos patentes de la alcoholes, a saber, roles 4-23824 y 4-23825; y que, en el Concejo Municipal de 20 de diciembre del año 2022, se dispuso la no renovación de tales patentes de alcoholes.

SEPTIMO: Que para resolver la acción constitucional, corresponde traer a colación las normas jurídicas atinentes a la materia:

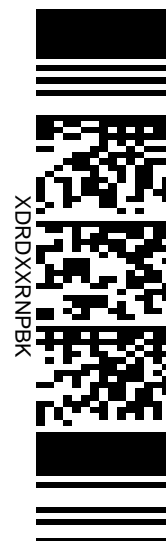
En primer lugar, el artículo 65 letra o) de la Ley 18.695, Ley Orgánica de Municipalidades, el que señala que:

“El Alcalde requerirá acuerdo del Consejo para: “Otorgar, renovar, caducar y trasladar las patentes de alcoholes. El otorgamiento, la renovación y traslado de esas patentes, se practicará previa consulta a las Juntas de Vecinos respectivas.”

A su turno, la norma anterior, se relaciona con el inciso primero del artículo 5 de la ley 19.925, conocida también como “Ley de Alcoholes”, que indica que: “Las patentes se concederán en la forma que determina esta ley, sin perjuicio de la aplicación de las normas de la Ley de Rentas Municipales y de la ley N° 18.695, en lo que fueren pertinentes.”

OCTAVO: Que de acuerdo con las disposiciones legales antes señaladas, aparece que, para los efectos que se decida sobre las patentes de alcoholes: y, en el caso en estudio, sobre su renovación, el señor Alcalde requiere para ello, el Acuerdo del Concejo, y consultar a las Juntas de Vecinos respectivas.

NOVENO: Que respecto del primer requisito, esto es, el Acuerdo del Concejo, efectivamente, por Sesión Ordinaria N° 62 del día 20 de diciembre del año 2022, se adoptó el Acuerdo N°587, por el cual, por unanimidad de sus Concejales, se acordó no renovar las patentes de alcoholes. En cuanto al segundo requisito, de la misma Sesión y decisión consta que se tuvo a la vista, el Informe desfavorable de la



Junta de Vecinos, según Memorándum N°23062 de 15 de ese mes y año.

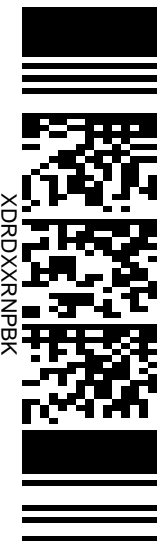
DÉCIMO: Que como puede constatarse de las normas legales precedentes, la recurrida, para adoptar la decisión de no renovar las patentes de alcoholes, se ha ajustado al procedimiento dispuesto por la legislación vigente, sin que obste a lo anterior que el local comercial la fecha de la decisión, se encuentre sin funcionamiento.

UNDÉCIMO: Que a su vez, de la sola lectura de los Decretos Alcaldicios, es posible constatar que se encuentran fundados, en cuanto al primero, esto es, el N° 1960, deja constancia de las normas legales y de todos los antecedentes que se tuvieron a la vista para su dictación, en especial, la Sesión Ordinaria N°62 y el Acuerdo N°587. Respecto del N°165, se señalan los motivos de la reconsideración, esto es, los fundamentos del Decreto N° 160; los antecedentes que se tienen a la vista; y que, en definitiva, no se presentaron nuevos argumentos para modificar la decisión. Deja constancia, igualmente, los recursos que, el interesado puede deducir conforme a la Ley 19.880.

DUODECIMO: Que de lo expuesto precedentemente, aparece de forma nítida, que ambos actos administrativos han satisfecho las exigencias legales que le impone, tanto el inciso segundo del artículo 11 como el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley 19.880, esto es, se encuentran debidamente fundados, lo que en todo caso, el propio recurrente reconoce, situación diversa es que tales argumentos no sean de su satisfacción y contrarios a la tesis jurídica que sustenta.

DECIMO TERCERO: Que, sin perjuicio de lo anterior debe hacerse presente que, la propia recurrente, ha reconocido en su escrito de reconsideración administrativa y que dio origen al decreto Alcaldicio N° 165, los hechos en que ahora desconoce en su acción cautelar, por lo que aparece contrariar sus actos propios.

DECIMO CUARTO: Que todo lo antes razonado lleva a concluir que el arbitrio en análisis no puede prosperar, por lo que resulta innecesario analizar la concurrencia o no de las garantías que el recurrente estima conculcadas.



Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, **SE RECHAZA**, en todas sus partes, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Lazcano, Lamas y Franzani Limitada en contra de la Municipalidad de Providencia, su Alcaldesa y Concejales.

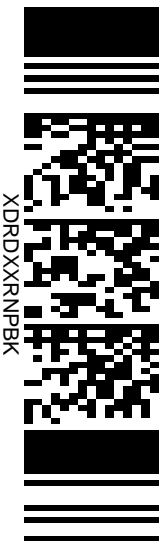
Redacción de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-2398-2023

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señora Marisol Andrea Rojas Moya, señor Tomás Gray Gariazzo y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia. No firma el ministro señor Gray Gariazzo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, seis de octubre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Pronunciado por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Marisol Andrea Rojas M. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, seis de octubre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a seis de octubre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

